1. AFECTACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM:

En primer lugar, resulta evidente la transgresión al *principio de non bis in idem*, propio del derecho fundamental al debido proceso administrativo, en la medida que mediante oficio No. 110.2024.335 del 12 de diciembre de 2024, la Alcaldía Municipal de Toro – Valle del Cauca citó a audiencia de presunto incumplimiento del contrato de obra pública No. 009 de 2021 por los mismos hechos que hoy nos convocan, tanto al contratista como a la aseguradora que hoy se presentan a esta audiencia, existiendo identidad de sujetos y objeto; pues dentro de los hechos relacionados en dicha citación, se indicó que se daba inicio al proceso como consecuencia de una comunicación de la interventoría, en donde se solicitaba a la administración la afectación del amparo de estabilidad de la obra por falta de reparación de las placas huellas afectadas en el corredor vial de Toro – Ventaquemada – Base Militar del municipio de Toro, que resulta ser el mismo sustento fáctico de la Resolución No. 013 del 16 de enero de 2025.

Por lo anterior, es un claro desconocimiento del debido proceso de las partes el que se dé inicio a un nuevo proceso de incumplimiento por hechos idénticos a los que dan sustento a otro proceso administrativo sancionatorio que, por demás, aún no ha concluido.

Sobre el particular, es importante indicar que la Corte Constitucional ha reconocido que este principio no sólo es aplicable al ámbito penal, sino a todo el derecho sancionador. Asimismo, que está íntimamente relacionado con la seguridad jurídica y está inmerso en el debido proceso, en los siguientes términos:

“No obstante, la jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un ámbito diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso sancionador. De tal manera que cuando la finalidad de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho, este principio es aplicable.

(...)

La función de este derecho, conocido como el principio non bis in idem, es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí que la Constitución prohíba que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo hecho.

(...)

Adicionalmente, la Corte constata que el constituyente colombiano prefirió una consagración del principio non bis in idem según la cual la prohibición no está dirigida exclusivamente a una doble sanción. La prohibición se dirige a ser “juzgado” dos veces.[21] Considera la Corte, que lo anterior se ajusta a los fundamentos del principio non bis in idem ya que la seguridad jurídica y la justicia material se verían afectadas, no sólo en razón de una doble sanción, sino por el hecho de tener una

persona que soportar juicios sucesivos por el mismo hecho. El principio non bis in idem prohíbe que después de que ha terminado conforme a derecho un juicio, posteriormente se abra investigación por el mismo “hecho” dentro de la misma jurisdicción. De tal manera que la expresión “juizado” comprende las diferentes etapas del proceso de juzgamiento, no sólo la final.[22] (SENTENCIA C-870/02)”.

En virtud de lo anterior, es clara la violación al principio de non bis in idem y, consecuentemente, al debido proceso de las partes, lo que hace necesaria la terminación del presente proceso, *so pena* de incurrir en causales de nulidad que afectan su legalidad.

2. FALTA DE COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En todo caso, si se tratara del procedimiento administrativo general,

En el presente asunto, es clara la falta de competencia del MUNICIPIO DE TORO - VALLE para adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, comoquiera que este está contemplado únicamente para incumplimientos de obligaciones contractuales y, en tal medida, no puede adelantarse por situaciones post-contractuales, ni cuando haya un recibo a satisfacción de la obra, como en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se propone la presente excepción como un incidente de nulidad procesal, y como un argumento de defensa. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es afectar el amparo de estabilidad y calidad de la obra, y no declarar incumplimiento alguno por parte del contratista, habida cuenta que este cumplió a satisfacción con sus obligaciones contractuales y, por tal motivo, se expidió el acta de recibo a satisfacción de la obra.

En tal medida, es importante recordar que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. *Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:*

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, *la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera (...).”*

Como se aprecia, el procedimiento está contemplado cuando se evidencia el incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato, de modo que este se hace inviable cuando se terminó el contrato y se expidió el acta de recibo a satisfacción de la obra. Así lo ha entendido Colombia Compra Eficiente en el Concepto 080 de 2021 que señala:

“Por ello, impuesta cualquier sanción mencionada, la entidad –previa citación de la aseguradora– está facultada para afectar el amparo de cumplimiento, siniestrando la póliza conforme al procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Dicho trámite, como se expuso, se establece para declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. En esta medida, dicha norma no aplica para declarar el siniestro del amparo de estabilidad de la obra, el cual supone que el contratista ejecutó las actividades pactadas y que la entidad las recibió a satisfacción, encontrando posteriormente vicios que afectan su calidad y obligan al saneamiento¹. (...) En este contexto, como no aplica el artículo 86 de la Ley 1474, y en la medida que el artículo 29 prohíbe decisiones de plano, la Subdirección de Gestión Contractual considera que el trámite de la declaratoria del siniestro de estabilidad y calidad de la obra se rige por el procedimiento administrativo general dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.

Lo anterior, con fundamento en que no es posible alegar la inejecución de obligaciones a cargo del contratista, una vez recibida la obra. Bajo esta óptica, la administración carece de la prerrogativa unilateral prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 cuando pretende exigir al contratista y a la aseguradora la garantía de estabilidad de la obra o calidad de bienes y servicios, amparos naturalmente post-contractuales que exigen para su afectación el recibo a satisfacción de las obras. De tal manera, como en el presente asunto el contrato fue recibido a satisfacción, no puede predicarse un incumplimiento obligacional del contratista y, por tal razón, es imposible adelantar el procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

3. DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO - NO SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011

Sobre el particular, es importante indicar que, si en el hipotético y remoto evento que se admitiera competencia de la entidad territorial para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 para afectar un amparo post-contractual como el de estabilidad de la obra, la citación a audiencia contenida en la resolución No. 013 del 16 de enero de 2025 no cumple con los requisitos previstos en el mentado artículo, en la medida que

¹ En esta medida, recibida la obra, no es posible alegar la inejecución de las obligaciones a cargo del contratista, pues la recepción «[...] es un acto jurídico y patrimonial, por el cual “el comitente acepta la entrega de la obra ejecutada” y “declara extinguida la obligación de hacer que debía cumplir el constructor”. Esta extinción, en la medida en que el comitente no manifieste reservas acerca de su alcance, implica la conformidad total y definitiva con la obra o con su producto, incluso en relación con el plazo de ejecución. Es la culminación del contrato desde el punto de vista del objeto perseguido por el comitente al celebrarlo. Es también la consumación plena de las obligaciones asumidas por el constructor» (PODETTI, Humberto. El contrato de construcción. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 446).

no se hace una relación detallada y precisa de los hechos que dan origen al incumplimiento, ni tampoco viene acompañada de un informe de interventoría o supervisión, ni pruebas que sustenten dicho incumplimiento.

Al respecto, es necesario recordar los requisitos que debe contener la citación que convoca a las partes a audiencia de descargos, *so pena* de incurrir en un posible desconocimiento de su debido proceso. Así las cosas, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 dispone:

“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; (...)”

De esta manera, la citación debe contener como mínimo: i) una mención expresa y detallada de los hechos que soportan el inicio del proceso de incumplimiento contractual; ii) debe estar acompañada del informe de interventoría o supervisión en el que sustente la actuación; iii) debe enunciar las normas o cláusulas posiblemente violadas y; iv) es necesario que contenga las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación.

Ahora bien, al revisar la citación que fue remitida a mi procurada, se evidencia que no se acompañó del informe de interventoría que sustentó la actuación, ni de ningún otro anexo que sirva de prueba para acreditar el presunto incumplimiento del contratista respecto de sus obligaciones contractuales.

En virtud de lo anterior, se ponen en evidencia las falencias de la citación remitida a mi representada, lo cual puede derivar en una afectación grave al debido proceso y derecho de defensa de las partes, tal y como lo ha reconocido el Consejo de Estado en los siguientes términos:

“El debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 3 del CPACA), tiene una materialización singular y significativa frente a las actuaciones de la

administración durante su actividad contractual. La desaparición, en la redacción original de la Ley 80 de 1993, de la posibilidad de pactar y hacer efectivas las multas y la cláusula penal, dio origen a un número importante de providencias que se pronunciaron sobre el debido proceso administrativo, y a la adopción de las disposiciones del artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sobre las actuaciones administrativas sancionatorias en materia contractual.

En vigencia de la Ley 1474 de 2011, hoy resulta claro que para la declaratoria de incumplimiento, y para hacer efectiva la cláusula penal (como ocurrió en los actos administrativos demandados), la administración debe cumplir con el procedimiento legal establecido, en el cual se requiere una citación previa al contratista para que asista a una audiencia, en desarrollo de la cual la administración debe dar a conocer las razones que motivaron su actuación y las normas violadas, para que el contratista pueda, a su vez, ejercer su derecho de defensa”².

En otra oportunidad, se adujo:

“27. Salta a la vista que el documento en mención no llena las exigencias del literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma que prevé el procedimiento que deben observar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para “declarar el incumplimiento” e “imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato”. En efecto, se echan completamente de menos en la citación la “mención expresa y detallada de los hechos que la soportan” y la enunciación de “las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación”, requisitos que no podían ser obviados, como lo consideró el Tribunal, porque el Consorcio Ingenieros Asociados (se transcribe): “siempre estuvo enterado de los hechos que motivaron el desarrollo de la audiencia que se llevó a cabo en el curso del proceso sancionatorio”.

28. Así las cosas, la Sala considera acreditada la nulidad de los actos administrativos demandados por violación del derecho al debido proceso y, en consecuencia, revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones No. 941 y 1441 de 2013. Al haberse accedido a este argumento, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre aquel relacionado con la imputación al Consorcio Ingenieros Asociados de la inejecución del contrato de obra No. 1555 de 2011 y la configuración de la excepción de contrato no cumplido”³.

Bajo esta línea argumentativa, es necesario que la entidad subsane los yerros de la citación e indique de forma detallada y expresa los hechos que soportan el procedimiento, además de acompañarla con el informe de interventoría, porque de otra manera se estaría vulnerando el debido proceso y derecho de defensa de las partes, lo que conllevaría indudablemente a la ilegalidad de la actuación.

² CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 59325 del 9 de julio de 2021, C.P. Alberto Montaña Plata.

³ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 66206 del 4 de mayo de 2022, C.P. Alberto Montaña Plata.

4. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

En el presente asunto está plenamente configurada la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, teniendo en cuenta que la entidad tuvo conocimiento de las presuntas fallas en la placa huella desde el 2022 inclusive, por lo tanto, a día de hoy, ya habrían transcurrido más de los dos (2) años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio

Al respecto, es importante tener en cuenta que el artículo 1081 del Estatuto Comercial establece que las acciones derivadas de los contratos de seguro prescriben en el término de dos años. Dicho precepto establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria **será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.***

*La prescripción extraordinaria **será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.***

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha hecho múltiples análisis para determinar el momento desde el cual se cuenta la prescripción bienal de que trata el artículo en mención, dejando claro que este se cuenta a partir del momento en que la entidad tiene conocimiento de las deficiencias, conocimiento que no debe ser cualificado o tener algún grado de certeza. Así, en sentencia con radicado No. 68993 del 24 de abril de 2023, con ponencia de la consejera Martha Nubia Velásquez Rico, se indicó:

“Identificadas las tesis propuestas por los sujetos procesales, la Subsección considera que el entendimiento del SENA no es correcto, dado que, en relación con el amparo de estabilidad de la obra, el término bienal de prescripción ordinaria al que se refiere el artículo 1081 del Código de Comercio, con apego a las reflexiones que sobre este tópico ha ofrecido la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, comienza a correr desde el momento en que se tiene o se ha debido tener conocimiento de deterioros de la obra ocurridos durante la vigencia³⁶ del mencionado amparo y no desde que se alcanza un determinado grado de certeza sobre la magnitud del daño y la causa que los originó³⁷

Es necesario advertir que el conocimiento “cualificado” del hecho que da base a la acción a partir del cual el extremo pasivo pretendió contabilizar el plazo del fenómeno extintivo de las acciones derivadas del contrato de seguro, en definitiva, no se ajusta a lo establecido en el artículo 1081 del estatuto comercial, norma de orden público que, se reitera, en ninguna circunstancia podría llegar a ser modificada por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Sobre la necesidad de obtener la certeza técnica de la causa de la inestabilidad de la obra, la

Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación ha razonado de la siguiente manera [transcripción literal]: “[...] **Desde el momento en que adquiere conocimiento acerca del deterioro de la obra, la entidad debe adelantar las actividades necesarias para obtener la certeza técnica de la causa del daño y determinar su cuantía, para así establecer si el mismo es imputable al contratista y, de ser así, el valor por el cual debe ser declarada la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra. El resultado de estas actividades será el fundamento del acto administrativo de declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro empiece a correr a partir del momento en que se conoce el resultado de las mencionadas actividades, pues ello implicaría dejar en manos del interesado la determinación del momento en el cual debe comenzar a contabilizarse el término prescriptivo [...]**” [énfasis añadido] [Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente No. 47.166, C.P. Alberto Montaña Plata].

Lo mismo se indicó en sentencia con radicado No. 67240 del 1 de marzo de 2023, con ponencia del Consejero Martín Bermudez Muñoz.

Pues bien, queda claro entonces que la prescripción bienal de que trata el artículo 1081 del C. Co. comienza a contar a partir del momento en que la entidad tuvo razonablemente conocimiento del hecho, y no puede admitirse que dicho plazo se puede extender si se otorga un plazo adicional al contratista para subsanar, o si no hay plena certeza del incumplimiento, sino que el término se cuenta desde el momento mismo en que se conoce del hecho que da base a la acción.

Aterrizando lo anterior al caso concreto, es menester precisar que, a pesar de que en la resolución se indica que el 25 de septiembre de 2024 se realizó visita técnica en donde se lograron establecer una serie de inconsistencias en la obra, no hay que perder de vista que en el otro procedimiento administrativo sancionatorio del que se habló al inicio, se adjunto un informe de interventoría con fecha 3 de noviembre de 2024 e identificado con el radicado SP-073-INVIAS-002-1224, en donde se adujo lo siguiente:

“La Alcaldía Municipal de Toro, con el comunicado No. 160.2022.228 del 13 de septiembre de 2022, solicitó las reparaciones de las placas huellas afectadas del tramo vial, mediante la garantía vigente, informando que solo habían transcurrido nueve (9) meses desde la entrega de las obras a la comunidad (...)”. Incluso, en el mismo informe se indica: “de manera, y pese a las constantes solicitudes, apremios y llamados realizados al Contratista tanto por la Alcaldía Municipal de Toro, Instituto Nacional de Vías (INVIAS), esta Interventoría e incluso la Contraloría General de la República, a día de hoy han transcurrido más de veintisiete (27) meses de haberse detectado las fallas en el corredor (...). Es decir, la misma interventoría reconoce que han transcurrido más de dos años desde que se detectaron las fallas por las cuales se pretende afectar el amparo de estabilidad de la obra, lo que evidencia con creces la configuración de las acciones derivadas del contrato de seguro.

5. FALTA DE ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN EL ART. 1077 DEL C. CO. – NO SE HA PROBADO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA

En concordancia con lo manifestado al inicio respecto del incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, es preciso manifestar que la entidad territorial no ha acreditado los elementos previstos en el artículo 1077 del C. Co., esto es, ocurrencia del siniestro y cuantía de la pérdida, en la medida que con la resolución no se adjuntó una sola prueba frente al presunto incumplimiento, y mucho menos frente a la cuantía del perjuicio.

Por lo tanto, para acceder a cualquier tipo de indemnización con cargo al citado amparo, es necesario que el Asegurado demuestre, **además del incumplimiento de las obligaciones a cargo del Tomador de la póliza**, la existencia de un **perjuicio efectivamente sufrido**, como consecuencia de la conducta desplegada por el contratista, mediante el envío de las pruebas idóneas que considere para tal fin, tales como: **nuevos contratos, soportes de pago, facturas de compras, etc.**; que demuestren en forma inequívoca la asunción por el beneficiario del contrato de seguro; sin que medie ninguna causal eximente de responsabilidad a favor del contratista- tomador.

Se precisa que, corresponde al concepto de perjuicio previamente aludido: aquel detrimento patrimonial padecido por el asegurado, representado, en la asunción de mayores costos a los inicialmente previstos para la ejecución y/o terminación de los trabajos objeto del contrato, circunstancia que no se comprueba con la documentación aportada.

Soportando un poco más lo señalado, vale la pena resaltar que la doctrina define como “perjuicio directo”:

“Las Erogaciones que ha debido asumir el acreedor (contratante) y que no le hubiera correspondido asumir en caso de no haberse el incumplimiento del deudor (contratista).

En este sentido, el daño resarcible presenta unos contornos más restringidos en las pólizas de seguro de cumplimiento con respecto a aquel que es propio de la responsabilidad contractual”⁴.

Bajo este precepto, es importante recordarle que el contrato de seguro tiene un carácter indemnizatorio, y así lo consagra el código de comercio así:

“ARTÍCULO 1088. <CARÁCTER INDEMNIZATORIO DEL SEGURO>. Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso.”

Por lo anterior, su despacho no pude pretender cobrar sumas adicionales a las del presunto perjuicio con el que se indemnizaría el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del incumplimiento contractual; so pena de incurrir en un ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA.

⁴ Narváez Bonnet, Jorge Eduardo, El Seguro de cumplimiento de contratos y obligaciones, Editorial Ibañez, 2011. Pag 433

“No obstante, no basta con la mera realización del riesgo -ocurrencia del siniestro-, sino que, por expresa disposición legal (artículo 1077 del Código de Comercio), hace falta que el asegurado demuestre ese hecho y también la cuantía de la pérdida originada en aquel. Como se observa, la carga que se ubica en cabeza del asegurado no se limita a que afirme que el riesgo ha ocurrido y a que señale una determinada cifra a título de perjuicio o a que realice una mera liquidación; la carga consiste en demostrar efectivamente ambas cosas.

Entonces, si a la exigibilidad de la garantía pretende llegarse a través de la expedición de un acto administrativo, ello supone que en tal acto la entidad pública contratante deba cumplir con la acreditación de ambos supuestos, pues, aun cuando se admita que tiene competencia para proferirlo, ello no la releva de la carga de demostrar lo que exige la ley comercial para el surgimiento de la obligación de pago de la indemnización en cabeza de la aseguradora. Otra cosa es que, al quedar contenida tal decisión en un acto de esa naturaleza, quede cobijada por la presunción de legalidad, lo que impone suponer que la decisión está basada en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ello; sin perjuicio, claro está, de que pueda ser desvirtuada por vía judicial. (SENTENCIA CE, S3, RAD. 54911, 23 DE SEPT. DE 2022)”.

No sobra recordar que el amparo de estabilidad de la obra cubre a la entidad e los perjuicios imputables al contratista, sufridos por la obra entregada, y en la presente actuación no se ha logrado acreditar que existan incumplimientos imputables a aquel, máxime cuando el contratista advirtió que hay diferentes circunstancias que pueden derivar en la afectación de la placa huella como derrumbes o vehículos pesados. Por lo tanto, no se ha logrado acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

6. LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO: \$255.292.516,5

Se solicitó como prueba documental las pólizas y, para finalizar, se indicó que se tuviera en cuenta la voluntad de cumplimiento del contratista.